

# NEW LEFT REVIEW 129

SEGUNDA ÉPOCA

JULIO-AGOSTO 2021

## ARTÍCULOS

GÖRAN THERBORN	Desigualdad y democracia	7
MICHAEL DENNING	Todos legisladores	33
JAVIER MORENO ZACARÉS	¿Euforia del rentista?	51
NICK BURNS	La política de Pessoa	75
MARCUS VERHAGEN	Arte y tiempo	103
PERRY ANDERSON	Timpanaro en la angloesfera	115

## CRÍTICA

SASKIA SCHÄFER	Revoluciones contrastadas	130
ERIKA BALSOM	Visiones radicales del cine	141
TONY WOOD	Problemas en Ecuador	150
JOY NEUMEYER	Enterrar al Homo Sovieticus	160

---

[WWW.NEWLEFTREVIEW.ES](http://WWW.NEWLEFTREVIEW.ES)

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

INSTITUTO  
**25M**  
DEMOCRACIA

SUSCRÍBETE

**ts**  
d traficantes de sueños



Thea Riofrancos, *Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador*, Durham (NC), Duke University Press, 2020, 252 pp.

TONY WOOD

## RETROCESO EN ECUADOR

Los resultados de las elecciones presidenciales de este año en Ecuador han supuesto un indiscutible revés para la izquierda latinoamericana. Después de años de reveses para la ola de gobiernos progresistas latinoamericanos de principios de siglo, algunos acontecimientos recientes, en especial la elección de Alberto Fernández en Argentina en 2019, la rebelión chilena de 2019-2020 y el regreso al poder del MAS en Bolivia en 2020, daban a entender que el impulso derechista en la región podía detenerse. El 7 de febrero de 2021, Ecuador parecía confirmar esta tendencia, puesto que Andrés Arauz, un economista de 36 años y exministro del gobierno de Rafael Correa encabezaba cómodamente la primera ronda de la votación. Pero cuando se celebró la segunda vuelta el 11 de abril, fue el oponente de Arauz, el banquero centroderechista Guillermo Lasso quien se alzó con la victoria obteniendo el 52 por 100 de los votos frente al 48 por 100 de Arauz. Después de cuatro años, durante los cuales el sucesor de Correa, Lenín Moreno, había desmantelado inflexiblemente uno tras otro los avances sociales conseguidos bajo el mandato de su predecesor, se perdía una vez más la ocasión de virar el país hacia la izquierda.

Un examen completo de las razones de esta derrota debería tomar nota de muchos factores, pero en toda discusión de la misma debe tenerse muy en cuenta el papel que han jugado durante años los enfrentamientos cada vez más enconados protagonizados por los dos componentes de la izquierda ecuatoriana: por un lado, las corrientes correístas que buscaban avanzar en las prioridades redistributivas de la Revolución Ciudadana, iniciadas por

Correa cuando llegó al poder en 2006; y, por otro, la coalición de movimientos predominantemente indígenas agrupados en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y del partido político Pachakutik, que exigía el abandono de un modelo económico persistente y claramente dependiente de la extracción de los recursos naturales.

Estas dos posiciones estaban representadas en la disputa presidencial por las candidaturas de Arauz y de Yaku Pérez, de Pachakutik, y no cabe duda ninguna de que su rivalidad conformó el resultado final. En febrero Pérez se quedó detrás de Lasso por tan solo 32.000 votos y su recomendación a sus seguidores de que invalidaran sus votos en la segunda vuelta de abril bien podría haber sido clave de la victoria de Lasso. En un duelo que este ganó por el 4 por 100 de los votos, el voto nulo sumaba el 18 por 100, todo un record histórico para Ecuador, donde nunca había superado el 11 por 100 desde la década de 1980. La geografía del voto parecería confirmar que muchos partidarios de Pachakutik o bien invalidaron su voto o bien apoyaron directamente a Lasso: el banquero se llevó doce de las trece provincias en las que Pérez había ganado en la primera vuelta, incluyendo muchas de las zonas altas de la cordillera, tradicionalmente más pobres y predominantemente indígenas. A menudo lo hizo de manera aplastante, ayudado por el hecho de que en varias de las provincias del altiplano, los totales de Arauz eran menores que el voto nulo. No es arriesgarse mucho decir que la pelea interna de la izquierda ecuatoriana despejó el camino a la presidencia de Lasso.

¿Cómo y por qué se originó esta pelea? *Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador*, de Thea Riofrancos, ofrece un reflexivo análisis de los orígenes y la dinámica primordial de la divergencia existente dentro de la izquierda ecuatoriana. Centrándose en los años 2006-2016 proporciona una etnografía política de las disputas clave relacionadas con la extracción de los recursos naturales, considerando estos episodios como centrales para la consolidación de dos grandes frentes, que Riofrancos denomina «nacionalismo radical de los recursos» y «antiextractivismo». El primero exige «una propiedad colectiva del petróleo y de los minerales» y considera que los recursos naturales de Ecuador son un medio vital para llevar a cabo las políticas sociales progresistas, en especial la reducción de la pobreza. El segundo, en cambio, «rechaza por completo la extracción e imagina una sociedad «posextractivista», oponiéndose a los planes del gobierno de Correa de una minería de oro y cobre a gran escala y a cielo abierto como algo a la vez ecológicamente desastroso y antidemocrático, y acusando a Correa de pisotear el compromiso de la Constitución ecuatoriana de 2008 de hacer una consulta previa a las poblaciones afectadas. En opinión de Riofrancos, más allá del debate inmediato sobre las prioridades políticas, esta batalla por los recursos también suscita cuestiones más profundas sobre los objetivos de las políticas progresistas y sobre la localización

de la soberanía popular: no solamente quién controla el subsuelo, sino en último término, ¿quién gobierna?

*Resource Radicals* bebe de las experiencias de la autora, que vivió en Ecuador en 2007-2008 y efectuó el correspondiente trabajo de campo en el país entre 2010 y 2016. Riofrancos vive en Providence, Rhode Island, desde 2015 y es politóloga y miembro activo de la izquierda radical estadounidense; escribe con regularidad en publicaciones como *n+1*, *Dissent* y *Jacobin*. En su obra hasta el momento, el análisis crítico de los gobiernos progresistas latinoamericanos de principios de siglo se ha combinado con la defensa del ecosocialismo: es también coautora de *A Planet to Win*, un manifiesto de 2019 por un *Green New Deal*. *Resource Radicals* está escrito en una vena más académica (se basa en su tesis doctoral de 2014) y se incorpora a un cuerpo cada vez mayor de escritos académicos sobre la política de la extracción de recursos naturales. No obstante, su planteamiento difiere de los estudios históricos o de los político-económicos, así como de la literatura construida a partir de la hipótesis de la «maldición de los recursos naturales», dado su intenso énfasis en el ámbito discursivo, considerado como el lugar donde las visiones políticas rivales se construyen y se enfrentan. Su preocupación principal, sin embargo, es mostrar cómo «la movilización popular conformó las consecuencias políticas y económicas de la extracción de recursos», vinculando siempre con toda minuciosidad las batallas figurativas con los hechos materiales y su contexto histórico. El resultado es un estudio equilibrado y perspicaz de un caso nacional, que arroja luz sobre los dilemas más generales de la ejecutoria de los gobiernos progresistas latinoamericanos de principios de siglo.

Los recursos naturales han sido, por supuesto, fundamentales para la suerte de América Latina durante siglos, desde los saqueos coloniales de las potencias ibéricas hasta el *boom* exportador de finales del siglo XIX, que integró con más intensidad a buena parte de la región en la economía global y lo hizo en términos muy desiguales. Aunque la economía ecuatoriana estuvo dominada durante la mayor parte del siglo XX por las exportaciones agrícolas, el descubrimiento de petróleo en la Amazonía en la década de 1960 y después de gas en la costa en la de 1970 convirtió al país en un exportador de hidrocarburos. Durante un tiempo, bajo la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, los beneficios procedentes de la compañía petrolífera estatal se emplearon para financiar los objetivos de desarrollo nacional. Sin embargo, en la década de 1980, en Ecuador al igual que en el resto de América Latina, este modelo de iniciativa estatal se plegó a las recetas neoliberales al hilo de la rampante crisis de la deuda y la turbulencia económica mundial, lo cual trajo aparejadas la desregularización y la ortodoxia fiscal. Los objetivos de desarrollo se dejaron de lado, mientras que aumentó la dependencia de la exportación.

Pero no fueron los gobiernos neoliberales quienes cosecharon los beneficios del superciclo de los recursos naturales de principios del siglo XXI. Por el contrario, los elevados precios mundiales del petróleo, el gas, los metales, los minerales, la soja y otras materias primas de exportación llenaron los cofres de un gobierno progresista tras otro, desde la Venezuela de Chávez hasta la Bolivia de Morales, pasando por el Brasil de Lula y el Ecuador de Correa, lo cual permitió importantes incrementos del gasto social y de bienestar, que redujeron sensiblemente la pobreza en buena parte de la región. Como señala Riofrancos, no obstante, el punto álgido del ciclo progresista latinoamericano de principios de siglo, también coincidió con el surgimiento del concepto de «extractivismo», que ha sido movilizado por los críticos de estos gobiernos para atacar su continuada dependencia de los recursos naturales.

El término parece haber empezado a circular más ampliamente con posterioridad a la crisis financiera de 2008 y ha adquirido diversos significados. En su sentido más básico, simplemente nombra el excesivo peso de la exportación de materias primas en una determinada economía. El académico uruguayo Eduardo Gudynas, que junto con Maristella Svampa se encuentra entre las figuras más destacadas asociadas a esta línea de análisis, lo definía en 2015 como «un tipo de extracción de los recursos naturales, de gran volumen o con gran intensidad, que se destinan esencialmente a la exportación como materias primas, ya sean sin procesar o con un procesado mínimo». De acuerdo con esta vara de medir, la mayoría de los países de América Latina podrían sin duda calificarse de «extractivistas» y muchos de manera extrema: las materias primas suman más del 85 por 100 de las exportaciones de Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela, por ejemplo.

Pero como apunta el sufijo «-ismo», se supone que el concepto tiene también una dimensión sistémica, que se refiere tanto a un modelo de desarrollo como a los efectos más generales de la extracción de los recursos; tanto a una enfermedad histórica como a los síntomas de esta en el presente. Altamente impreciso como categoría analítica —en manos de diferentes autores y autoras puede describir cualquier cosa, desde los galeones de Manila al auge del comercio del guano en el siglo XIX, pasando por el agronegocio globalizado o las perforaciones petrolíferas en alta mar—, el extractivismo confunde los siglos y las formaciones sociales, lo cual a menudo ha formado parte de una iniciativa más amplia que funde capitalismo, socialismo y, de manera crucial, las variantes del desarrollismo de los gobiernos progresistas latinoamericanos de principios de siglo, en un único proyecto destructivo coextensivo de la propia «modernidad».

A pesar, o tal vez debido a esta enorme maleabilidad, el concepto de «extractivismo» se ha transformado en una especie de significante político flotante en América Latina, lo cual, de hecho, se convirtió en uno de los

rasgos distintivos de la política en torno a lo recursos de la década de 2010: la disputa se enmarcó de modo creciente no en el debate sobre las rentas del petróleo o el «desarrollo», por enunciarlo de este modo, sino sobre la idea de la extracción de recursos *tout court*. La emergencia y la centralidad de lo que Riofrancos denomina «el discurso extractivista» en Ecuador es tanto más sorprendente, porque dividió rápidamente a fuerzas políticas que habían estado previamente unidas en torno a una agenda común antineoliberal.

Para trazar el mapa de esa divergencia, Riofrancos comienza por rastrear minuciosamente la larga historia de las variadas formas de la movilización popular acaecidas en Ecuador. En términos sociogeográficos y etnolingüísticos, el país es enormemente diverso. Aproximadamente el 72 por 100 de la población se autoidentificaba como mestiza en el último censo, con una gran proporción de esta conservando algún vínculo con su herencia indígena. En torno al 7 por 100 de la población se clasificaba a sí misma como totalmente indígena, perteneciente a uno de más de los treinta grupos étnicos que están distribuidos principalmente entre la cordillera andina y las tierras bajas de la Amazonía; los afroecuatorianos sumaban otro 8 por 100, los blancos el 6 por 100 y los montubios, un grupo mestizo costero categorizado como una etnia distinta, otro 7 por 100.

Esquemáticamente, ha habido importantes disparidades políticas entre las comunidades indígenas del altiplano andino y los grupos de la Amazonía tanto en términos de sincronización, como de ideas motrices. (La franja costera del país ha sido históricamente un baluarte de la derecha, especialmente atrincherada en la mayor ciudad del país, Guayaquil, y, por lo tanto, tiene mucha menos presencia en el relato de Riofrancos). Las comunidades de la cordillera andina han luchado recurrentemente «contra la propiedad desigual de la tierra y las relaciones laborales ultraexplotadoras», alcanzando sus luchas una fuerza particular en las sucesivas olas de movilización desplegadas a partir de la década de 1930, que culminaron en la reforma agraria de 1964, la cual acabó finalmente con el sistema de propiedad semifeudal del huasipungo. Los movimientos de la Amazonía, por el contrario, adoptaron habitualmente una forma de «organización étnica para defender el territorio comunal contra la colonización de la tierra por parte del Estado y la prospección y extracción petrolíferas», tomando impulso a partir de la década de 1960, después de la reforma agraria, lo cual estimuló la colonización. Estas dos «trayectorias», como las denomina Riofrancos, solo comenzaron a converger en la década de 1970, propiciando como resultado de ello la constitución en 1986 de una confederación a escala nacional, la CONAIE.

En la década de 1990 y a principios de la de 2000, las diferentes alas de la movilización indígena se fundieron en una corriente más amplia de tendencia antineoliberal, siendo la combinación de sus fuerzas la que consiguió repetidamente parar el país y, en último término, la que contribuyó

a llevar a Correa al poder en 2006. Dentro de este consenso antineoliberal, la opinión predominante sobre los recursos naturales era la exigencia de la «expulsión de las compañías petrolíferas extranjeras, la nacionalización del petróleo y la canalización de los ingresos petroleros a la financiación de las necesidades sociales». Así como resultaban atractivas para las clases medias urbanas progresistas y para el electorado de clase obrera, estas demandas se conectaban con las peticiones de redistribución de las comunidades de la cordillera andina y eran completamente compatibles con su concepción de la soberanía. El programa de 1994 de la CONAIE, como observa Riofrancos, proclamaba que los recursos nacionales debían ser «propiedad exclusiva del Estado plurinacional». Pero ya existía otra veta de pensamiento sobre los recursos que se oponía a la extracción en sí misma: las comunidades amazónicas en particular la consideraban una amenaza a su modo de vida y a sus ecosistemas.

Ambas corrientes, argumenta Riofrancos, estaban expresando sus demandas en nombre de la soberanía, pero entendían por soberanía cosas diferentes. Una «invocaba la soberanía popular nacional contra el capital extranjero», mientras que la otra «afirmaba la soberanía territorial indígena contra la extracción». Mientras se opusieran al paradigma neoliberal vigente, las dos concepciones y sus correspondientes demandas podían aliarse, pero «retrospectivamente», sus diferentes lógicas eran evidentes». La primera de ellas enunciaba sus reivindicaciones en nombre de un *demos* que incluía toda la nación y lo hacía a escala del Estado-nación; la otra se fundamentaba en exigencias locales de soberanía que, en su opinión, debían preceder a las de este último. Una vez que el movimiento antineoliberal abrió la vía para la «Revolución Ciudadana», la disparidad entre ellas se trasladaría al primer plano político.

La Constitución de 2008 fue un hito importante y temprano del gobierno de Correa, que entronizó el carácter «plurinacional» del país. Pero, como señala Riofrancos, también cristalizó (sin resolverlas) las tensiones existentes entre estas visiones opuestas sobre la extracción de recursos, que habían tenido un papel protagonista en los debates de la Asamblea Constituyente de 2007-2008. Riofrancos describe los dos proyectos rivales del Artículo 57 que establecía los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. La propuesta minoritaria, apoyada por muchos grupos indígenas, era alinear a Ecuador con la Convención 169 de la OIT, que pide el «consentimiento libre, previo e informado». La opinión mayoritaria, no obstante, concedió a las comunidades indígenas el derecho de «una consulta previa libre e informada», que supone un criterio mucho más débil. Además, como observa Riofrancos, el texto final de la Constitución de 2008 estaba adornado de otras ambigüedades, que demostraron tener sus consecuencias: «Empodera a las comunidades afectadas por la extracción y concede derechos

a la naturaleza» pero, al mismo tiempo, «también afirma el control exclusivo del Estado de los recursos del subsuelo y sobre la propia biodiversidad».

Las luchas por la *consulta previa*, como se denominó entonces, se trasladan ahora al centro del análisis de Riofrancos. Lo que hacía especialmente intensas estas luchas era el hecho de que giraban principalmente no sobre los proyectos extractivos actuales, sino sobre los futuros, y en concreto sobre la minería, que hasta entonces no se había desarrollado mucho en Ecuador, pero que el gobierno de Correa quería fomentar como una nueva fuente de ingresos. Lo hacía en colaboración con concesiones mineras de propiedad extranjera (especialmente canadienses), que proporcionaban buena parte de la «información» que el gobierno daba a las comunidades como parte del proceso consultivo. Parece que en buena medida fue este auge de la minería, que afectaría principalmente a las comunidades de la cordillera andina, lo que precipitó el desplazamiento por parte del CONAIE a una postura totalmente antiextractivista. En otras palabras, las dos trayectorias históricas descritas, ahora se unían en oposición tanto a la extracción como al gobierno de Correa. Las protestas contra la Ley Minera de 2009, que regulaba el nuevo sector, trajeron consigo una serie de detenciones y señalaron el modo represor que el gobierno de Correa aplicaría a partir de entonces como respuesta al disenso antiextractivista.

Riofrancos nos ofrece evocadores retratos de acontecimientos especialmente significativos como la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos de 2012, una marcha que duró dos semanas desde El Pangui, la ciudad sureña de la Amazonia, hasta el Parque El Arbolito en Quito. Señala que, acompañando a la marcha, las personas participantes expresaron una serie de descontentos respecto de la Constitución de 2008, convirtiendo el documento en sí mismo no en un acuerdo estático, sino en una herramienta de lucha: «La Constitución vive entre nosotras», observa. Riofrancos también describe los intentos de las comunidades indígenas y de los grupos defensores del medio ambiente de aplicar el criterio superior del consentimiento y de organizar sus propias consultas democráticas, votaciones locales que ella denomina actos de «construcción estatal vernácula». Riofrancos nos ofrece un relato detallado de la consulta de 2011 sobre la minería de oro organizada por dos sistemas comunitarios de gestión del agua en la provincia de Azuay, que se abrió con una ceremonia ancestral —«El almizcle dulzón del palo santo quemado invadía el aire en torno a los círculos concéntricos de frutas, verduras, cereales y flores dispuestos sobre una tela rosa y azul»— y que terminó con un categórico 93 por 100 de los votos en contra de la mina. Uno de los organizadores principales de este referéndum, que el gobierno de Correa se negó a reconocer como legítimo, fue el activista indígena Carlos Pérez, quien en 2017 cambiaba su nombre por el de Yaku Sacha («agua de la montaña» en quechua) Pérez, una decisión que Riofrancos describe con diplomacia como un testimonio de «la relevancia cultural y política en aumento del indigenismo».



Al abordar el otro lado de la línea de fractura provocada por las políticas sobre los recursos de Ecuador, Riofrancos se basa en exhaustivas entrevistas con funcionarios públicos ecuatorianos. Lo que estas personas compartían, en opinión de Riofrancos, era una «narración que definía el neoliberalismo como la ausencia del Estado» y la aspiración a «construir un Estado que pudiera regular de manera experta la actividad económica». Aunque atiende a los desacuerdos existentes en el seno del Estado correísta, Riofrancos argumenta que, en su conjunto, los funcionarios públicos ecuatorianos pretendían enmarcar las políticas sobre los recursos como un asunto técnico, que giraba en torno al suministro de información, en cuyo caso la oposición sería un tema de información equivocada o de obstrucción deliberada; un veto de la minoría a las necesidades de la mayoría. Paradójicamente, este intento tecnocrático de despolitizar la política sobre los recursos solamente contribuyó a solidificar los frentes de batalla entre el gobierno y la oposición en aumento.

Riofrancos concluye tratando de sintetizar de manera ecuaníme tanto los logros como las limitaciones de las dos izquierdas ecuatorianas, que ella denomina la «izquierda en el poder» y la «izquierda en resistencia» y extraer lecciones de ellas que puedan aplicarse al conjunto de los gobiernos progresistas latinoamericanos de los últimos veinte años. Anota los logros concretos del gobierno de Correa –crecimiento económico sostenido, duplicación del gasto social como porcentaje del PIB, caída de los índices de pobreza del 38 al 22 por 100–, así como «el importante empoderamiento de las bases» que tuvo lugar durante el mismo. Al mismo tiempo, sin embargo, Ecuador se volvió más dependiente, y no menos, de las rentas procedentes de los recursos, profundizando en el predominio del modelo extractivo, así como contrayendo deudas importantes con China y con los bancos de desarrollo regionales. Por su parte, los movimientos antiextractivistas lograron poner en el centro del debate de la política ecuatoriana la cuestión de la extracción y «demostraron su capacidad de detener o impedir los proyectos tanto mineros como petrolíferos a escala local». Pero, como indica Riofrancos, «tuvieron dificultades para reunir una coalición popular a escala nacional capaz de articular y poner en práctica una alternativa al modelo extractivo».

En opinión de Riofrancos, la escisión de estas dos corrientes de la izquierda ha sido a la vez trágica e innecesaria. La disputa entre ellas «se volvió tan polarizada que cada una de ellas consideró a la otra un enemigo político más peligroso que el neoliberalismo». Continúa diciendo:

Perdida en esta disputa intestina se quedó la promesa radical del «socialismo del siglo XXI»: el control colectivo y democrático sobre las condiciones de la existencia socionatural. Un programa así podría haber exigido coherentemente tanto la redistribución de los ingresos del petróleo y la minería, como una transición que nos alejara del modelo de acumulación extractivo que genera esos mismos ingresos. Una visión así moldeaba el programa político de CONAIE en 1994, publicado en medio de movilizaciones masivas contra la reforma agraria

neoliberal [...]. Pero dos décadas después, el «socialismo» y el «antiextractivismo» han acabado por nombrar dos proyectos políticos contrapuestos.

Riofrancos considera, no obstante, que ambos proyectos contienen elementos que son fundamentalmente necesarios y ello no solamente en Ecuador. Se precisa urgentemente una agenda socioeconómica redistributiva para abordar las desigualdades y las injusticias cada vez mayores; la oposición a la extracción debe formar parte de toda estrategia que quiera impedir o simplemente ralentizar un desastre ecológico exponencial. Existe una clara correspondencia entre su insistencia en que ambas posturas pueden y deben combinarse y su defensa en otros espacios del *Green New Deal*.

*Resource Radicals* ofrece un análisis equilibrado y muy detallado de la pelea interna de la izquierda que tanto ha contribuido a moldear la trayectoria política reciente de Ecuador. Escrito a finales del mandato de Correa y en los primeros momentos del gobierno de Lenín Moreno, habla relativamente poco sobre los insistentes movimientos de este último para deshacer el legado de su predecesor, un enigma que se vuelve más comprensible si consideramos el correísmo en sí mismo como una coalición provisional, que en todo momento contuvo elementos que se oponían francamente a la agenda de Correa. El rápido desmoronamiento de la Revolución Ciudadana tal vez podría haber figurado de manera más destacada en el relato de Riofrancos, puesto que subraya la fragilidad interna de la «izquierda en el poder» durante el periodo que estudia. No obstante, *Resource Radicals* proporciona un cuadro detallado de cómo las limitaciones generales de las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas dos décadas se desarrollaron en términos políticos concretos. Privadas de una transformación más exhaustiva de las estructuras sociales del país, las fuerzas progresistas ecuatorianas solamente pudieron hacer avanzar sus programas sociales mediante la intensificación de la extracción. Los altos réditos de la extracción les permitieron trabajar un tiempo, pero esta estrategia estaba destinada por definición a toparse contra el muro en cuanto concluyera la bonanza extractiva, como sucedió después de 2014. En ese momento, las contradicciones que llevaban mucho tiempo mostrándose entre el «nacionalismo redistributivo radical de los recursos» y el «antiextractivismo» se volvieron cada vez más destructivas.

Esto, sin embargo, suscita a su vez cuestiones perturbadoras para el análisis de Riofrancos y en concreto para sus esperanzas de una síntesis de ambos proyectos. Por muy elogiable que pueda ser esta última intención, su libro es una prueba clara de la dolorosa incompatibilidad de esta idea en la práctica y su análisis de las concepciones rivales de la soberanía en juego – basadas como lo están en concepciones alternativas del Estado-nación– solo muestran la profundidad de la querrela. Riofrancos apunta acertadamente la tendencia de la crítica antiextractiva en general a plantear un «sistema total,

ideológicamente cerrado» y, por lo tanto, a «impedir de antemano la posibilidad de la transformación a no ser que se produzca un *shock* exógeno». Esto plantea un problema de fondo: ¿«Quién es el sujeto colectivo imaginado» que podría propulsar un cambio hacia un mundo posextractivo? Podríamos añadir también: ¿mediante qué tipo de luchas políticas, en oposición a qué, se va a forjar ese sujeto colectivo?

Aunque Riofrancos considera que las protestas de 2019 contra el gobierno de Moreno constituían una señal de esperanza, que apuntaba potencialmente a una renovada convergencia entre los diferentes sectores populares de Ecuador, la prueba que aportan las elecciones de 2021 es considerablemente más pesimista, pero el resultado de estas ponen de relieve, sin embargo, un aspecto que en el libro de Riofrancos recibe tal vez menos atención de la que debería. Al tratar extensamente de la pelea interna de la izquierda, *Resource Radicals* tiende a infravalorar el grado en el que la izquierda en el poder ecuatoriana, como el resto de los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas dos décadas, fue asediada por una elite no transformada y todavía extremadamente poderosa, que conservaba tanto su poder económico, como su dominio sobre los medios de comunicación, así como su influencia sobre las instituciones clave de los respectivos países, incluida la policía. La elite ecuatoriana, no solamente bien posicionada para sacar ventaja de la bronca de la izquierda, trabajó con ahínco para aumentarla. Un resultado obvio de ello ha sido la sorprendente inversión del mapa electoral del país, con las victorias de Arauz en la franja costera y Lasso arrasando en la cordillera andina. Queda por ver lo que durará esta alteración. La idea de trabajar con Lasso ya ha causado turbulencias en Pachakutik, con la repentina dimisión de Yaku Pérez y su abandono del partido el pasado 20 de mayo en protesta por la colaboración con el actual gobierno (aunque también se había opuesto a cualquier alianza con el partido de Arauz). Mucho depende de si la pelea dentro de la izquierda sigue sin cauces de resolución o si las dos izquierdas son capaces de converger para a unirse una vez más en su oposición a un neoliberalismo rearmado y remozado. Riofrancos nos da razones para el pesimismo a la vez que construye un alegato para la esperanza.